

Estado de Decepción

Informe de la Delegación de Verificación sobre la Detención de los Defensores del Agua de Santa Marta, la Minería y el Estado de los Derechos Humanos bajo la Administración de Bukele en El Salvador

Coautores del Reporte:

Alejandro Artiga-Purcell*, Robin Broad, Pedro Cabezas*, John Cavanagh*, Bernie Hammond*, Manuel Pérez-Rocha, Angela Sanbrano*, Heather White*, Ross Wells*, Scott Wright* (*miembros de la delegación)

Patrocinadores de la Delegación:

Institute for Policy Studies
SHARE Foundation

Organizaciones que endosan este reporte:

Alianza Centroamericana Frente a la Minería
Institute for Policy Studies
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador
Mining Watch Canada
Pax Christi International
Public Service Alliance of Canada
SHARE Foundation
United Church of Canada
Washington Ethical Society

11 de enero, 2024

Tabla de contenidos

Uno	La Delegación	3
Dos	Principales Hallazgos de la Delegación	4
Tres	Resumen Ejecutivo	5
Cuatro	La Detención de los Defensores del Agua de Santa Marta	6
Cinco	Contexto Político del Estado de Excepción de Bukele	8
Seis	Evidencia de que el Régimen de Bukele Quiere Reiniciar la Minería	12
Siete	Impresiones de la Situación Actual en El Salvador: De la violencia de Pandillas a la Violencia Patrocinada por el Estado	16
Ocho	Recomendaciones	20

Uno: La Delegación:

Del 15 al 20 de octubre de 2023, ocho delegados de los Estados Unidos y de Canadá mantuvieron en El Salvador 19 reuniones con líderes de grupos de la sociedad civil, grupos de derechos humanos, abogados, economistas, un miembro de la legislatura y otros. La delegación visitó organizaciones del departamento de Cabañas, específicamente en San Isidro, Guacotecti, Victoria y Santa Marta. La delegación también participó en una ceremonia para conmemorar el 40 aniversario de la organización de derechos humanos, Tutela Legal María Julia Hernández, y para presentar a esa organización el Premio Letelier-Moffitt 2023 del Institute for Policy Studies. Este es un informe de los hallazgos de la delegación.

Los autores:

Alejandro Artiga-Purcell, Profesor Asistente de Catedra en Comunicación Ambiental de la Universidad Estatal de San José, su área de investigación se centra en la justicia ambiental y los movimientos sociales en Centroamérica.

Robin Broad, Becaria Guggenheim por su trabajo en El Salvador y profesora de investigación en la American University, es coautora de *Defender el Agua: Como la Gente del El Salvador enfrentó la Codicia Empresarial* (Grano de Sal, 2022).

Pedro Cabezas, es el Coordinador de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN)

John Cavanagh, ex economista de las Naciones Unidas, es coautor de *Defender el Agua* y asesor principal del Institute for Policy Studies, con sede en Washington.

Bernard Hammond es Profesor Emerito, Sociología/Justicia Social y Estudios para la Paz y Justicia del, King's University College, Western University, London, Canada.

Manuel Pérez-Rocha es investigador asociado del Institute for de Policy Studies, donde trabaja en su Proyecto de Economía Global y Asociado del Transnational Institute.

Angela Sanbrano, J.D., ex Coordinadora Nacional del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES). Se ha desempeñado como Directora Ejecutiva y miembro de la junta de varias organizaciones que proporcionan servicios directos y defensa para la inmigración, el trabajo y los derechos humanos.

Ross Wells es copresidente del proyecto El Salvador, Sister-Community para The Washington Ethical Society.

Heather White es Coordinadora de Comunicaciones y Movilizadora de Conocimientos de prácticas de manejo sustentable con respaldo científico. Pasó 13 meses trabajando en Desarrollo social y económico en el norte de El Salvador en 2004-2005 como personal en el exterior de la Iglesia Unida de Canadá.

Scott Wright es, ex director del Centro Columbano para la Justicia, la Paz y la Ecología, trabajó para la Iglesia Católica durante la guerra civil en la década de los años 80, y representó a Pax Christi Internacional en esta delegación.

Instituciones Patrocinadoras

Institute for Policy Studies (El Instituto de Estudios de Políticas) es un centro de investigación de temas múltiples que trabaja con movimientos sociales dinámicos para convertir ideas en acción para la paz, la justicia y el medio ambiente. <http://www.ips-dc.org>

La Fundación SHARE tiene el compromiso de apoyar y acompañar al pueblo de El Salvador y Honduras y los refugiados en Estados Unidos en su lucha por justicia social y desarrollo sostenible. <http://www.share-elsalvador.org/>

Dos: Conclusiones Clave de la Delegación:

1. Entre las más de 70,000 personas que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha encarcelado en pésimas condiciones y con el uso de la tortura se encuentran decenas de miles de personas inocentes, incluyendo cinco defensores del agua y numerosos líderes sindicales. Hasta la fecha, el gobierno no ha presentado pruebas que respalden la detención de los cinco defensores del agua, y los cargos en su contra deberían retirarse en virtud de una amnistía de 1992.
2. Existe evidencia que Bukele desea revertir un voto unánime de la legislatura salvadoreña de 2017 para prohibir la minería, una medida que pondría en peligro el abastecimiento de agua del país y violaría la voluntad popular.
3. El Presidente Bukele ha tomado una serie de medidas para reducir la independencia del poder judicial, violar los derechos humanos básicos y suspender las libertades civiles y el estado de derecho en nombre de proteger a la población de la violencia causada por pandillas. El presidente también ha desfinanciado a gobiernos locales mientras expande el ejército y desvía millones de dólares de préstamos del extranjero para sus colaboradores.
4. Representantes de los poderes ejecutivos de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México y la Unión Europea han optado

por ignorar estas violaciones masivas de los derechos humanos al dejar de criticar las acciones de Bukele y proveer ayuda financiera a su gobierno.

Tres: Resumen Ejecutivo

Este informe comienza con una breve descripción del arresto y encarcelamiento, el 11 de enero de 2023, de cinco hombres que son miembros de una organización de protección ambiental y social, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES). Esta organización se ha distinguido por su labor de conservación del escaso suministro de agua en El Salvador, que está amenazado por diversos factores, entre ellos la industria minera. ADES jugó un papel significativo en la prohibición de la minería metálica que fuera aprobada por la legislatura de El Salvador en 2017. Durante los doce años de conflicto armado en El Salvador (1980-1992), los cinco miembros de ADES que fueron arrestados en enero de 2023 fueron combatientes y miembros de la coalición de fuerzas rebeldes, FMLN. Su detención se produjo como resultado de acusaciones de ser responsables del asesinato de una mujer en 1989, durante el conflicto.

Para comprender mejor las razones de su detención más de treinta años después, este informe explora el ascenso al poder de Nayib Bukele, el actual presidente del país, y traza las maniobras políticas que le han dejado con un poder casi absoluto y que le permitió en marzo de 2022 promulgar un "estado de excepción". Este decreto, que se ha renovado mensualmente y sigue en vigor, da a Bukele la libertad de suspender los derechos y garantías fundamentales de manera arbitraria y de detener y confinar indefinidamente a personas sin representación legal. Como resultado, se ha encarcelado a un estimado de más de 70,000 personas, muchas de las cuales pueden ser inocentes, ya que no se les ha dado la oportunidad de defenderse.

El informe vuelve a explicar por qué los defensores del agua fueron arrestados en 2023. Presenta evidencia de que Bukele tiene la intención de reintroducir la minería en El Salvador, en parte para abordar el pobre desenvolvimiento de la economía, incluyendo las enormes pérdidas financieras incurridas debido a su desafortunada decisión de hacer del Bitcoin una de las monedas oficiales del país, justo cuando estaba a punto de sufrir una dramática caída en su valor. La detención de estos hombres y el intento de calificarlos de asesinos parece en parte un intento de socavar el trabajo que han hecho para lograr la prohibición de la minería en el país y así ayudar a facilitar su retorno. También actúa como una advertencia de que la oposición a la minería y/o cualquier otra política gubernamental no será tolerada.

El informe nota la reacción mundial negativa a estas detenciones y la posterior decisión de un juez de primera instancia de enviar a los defensores a arresto domiciliario. El informe argumenta que los cargos contra los cinco no tienen fundamento, y que el caso debe

retirarse porque los cinco están cubiertos por una amnistía de 1992 negociada bajo auspicio de las Naciones Unidas. El informe cierra con las conclusiones de la delegación sobre la situación actual en El Salvador, y con recomendaciones sobre las medidas que se deben tomar para retirar los cargos contra los cinco, para mantener la prohibición contra la minería, y sobre cómo los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, México, las Naciones Unidas y otros, pueden apoyar el retorno de El Salvador a la gobernabilidad democrática.

Cuatro: Arresto de los Cinco Defensores del Agua de Santa Marta

El 11 de enero de 2023, por orden del fiscal general del gobierno de Nayib Bukele, la policía detuvo a seis hombres, cinco de ellos en el departamento de Cabañas, al norte de El Salvador¹, y uno en la ciudad de San Salvador. Los presuntos cargos están relacionados con actividades que ocurrieron durante el conflicto armado que afectó a El Salvador desde 1980 hasta 1992. Los seis hombres fueron miembros del FMLN, el grupo revolucionario armado que durante los 12 años de guerra civil se opuso a la dictadura brutal que había gobernado el país durante más de 50 años. Ese conflicto terminó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, negociados por las Naciones Unidas con la colaboración de España, México, Venezuela y Colombia. Tanto Canadá como Estados Unidos también firmaron los acuerdos en ese momento, hace más de 30 años.²

Más recientemente, los cinco hombres de cabañas que integran la comunidad de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) - Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco (director de ADES) y Saúl Agustín Rivas Ortega (abogado de ADES) - han sido conocidos como "defensores del agua". Esto es en referencia a su trabajo con ADES donde, entre otras actividades, ayudaron a liderar la campaña para defender el gravemente amenazado suministro de agua en el país. Con ese fin, contribuyeron junto a organizaciones e instituciones de la sociedad civil salvadoreña a la elaboración de la legislación que prohibió por completo la minería metálica en El Salvador en 2017.^{3 4}

Para comprender mejor el caso de los 5 de Santa Marta y las denuncias de criminalización contra grupos ambientales y de la sociedad civil, los participantes de la delegación tuvimos 19 reuniones con expertos y líderes de la sociedad civil, grupos de derechos humanos, abogados, economistas, y otros en San Salvador y Cabañas. Nuestra conclusión es que hay dos razones de peso para que el gobierno de El Salvador retire los cargos contra los cinco defensores del agua de Santa Marta. La primera es la falta de pruebas de la culpabilidad de los cinco. La segunda, por si fuera el caso, es que los cinco están cubiertos por la amnistía de 1992 en El Salvador, que fue parte de una Ley de Reconciliación Nacional aprobada tras los históricos Acuerdos de Paz de 1992. A continuación, detallamos cada una de estas razones.

Falta de pruebas

Tras la detención de los Cinco de Santa Marta, el 11 de enero de 2023, el Fiscal General de El Salvador alegó que los hombres, mientras fueron miembros del FMLN, secuestraron, torturaron y asesinaron a una mujer llamada María Inés Álvarez Alvarenga Leiva el 22 de agosto de 1989, y que pertenecieron a una organización criminal durante los doce años de guerra civil. El caso fue presentado por la hija de la mujer en abril de 2022.⁵

La única prueba proporcionada por la Fiscalía para presentar los cargos fue el testimonio de un testigo protegido que acusó a los Cinco del asesinato, pero admitió cuando fue interrogado por el abogado de los acusados que no tenía conocimiento de primera mano del presunto delito.⁶ Sin embargo, en la primera audiencia el juez dictó seis meses de prisión preventiva (renovada en agosto de 2023) para permitir a la fiscalía continuar su investigación preliminar, impuso una reserva en el caso y los detenidos fueron enviados a un centro de detención donde no tuvieron acceso a atención médica, apoyo legal ni visitas familiares. Más tarde ha salido a la luz que varios de los acusados tienen coartadas que justifican su ausencia en el supuesto momento de la muerte. Además, extrañamente, y después de más de 10 meses de búsqueda, el cuerpo de la supuesta víctima nunca ha sido encontrado. En junio de 2022, la fiscalía llevó a cabo un "proceso de exhumación" y no pudo encontrar un cuerpo.⁷

En agosto de 2023, después de más de ocho meses de prisión, finalmente se concedió a los acusados una audiencia en la que una jueza de primera instancia de Sensuntepeque ordenó que permanecieran bajo arresto domiciliario en lugar de continuar detenidos bajo las deplorables condiciones del sistema penitenciario salvadoreño. La Fiscalía General de la República no apeló esta decisión, lo que permitió a los defensores regresar a sus hogares con sus familias en septiembre de 2023. Sin embargo, la lucha legal continúa ya que la Fiscalía no ha retirado los⁸ cargos y el equipo de defensa legal ha presentado solicitudes para desestimar que el caso antes de llegar a la etapa de juicio.

Los Cinco están amparados por la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.

Además de la falta de pruebas contra los cinco, el equipo de defensa legal argumenta que los acusados están cubiertos por una amnistía de 1992.⁹ Durante la guerra civil el FMLN-FDR había alcanzado reconocimiento internacional como un parte beligerante del conflicto. Ese reconocimiento inicio con la Declaración Franco-Mexicana que lo reconoció como una fuerza política con aspiraciones legítimas al poder.¹⁰ Fue así como en septiembre de 1989, el FMLN y el gobierno salvadoreño iniciaron un diálogo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas que culminó tres años después con los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Estos fueron firmados el 16 de enero de 1992, en la Ciudad de México.^{11 12} Después, el 23 de enero de 1992, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, que admitió una amnistía a los miembros del FMLN para permitirles deponer las armas y participar en la vida política del país.¹³ En el artículo 6 de la ley dice que: excluye de

la gracia de la amnistía a “las personas que, según Informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en hechos graves de violencia ocurridos desde el 1 de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”. Por si fuera el caso, los hechos alegados y atribuidos por la Fiscalía a los cinco no están incluidos entre la lista de casos representativos incluidos en el Informe de la Comisión de la Verdad.¹⁴

Como parte de los Acuerdos de Paz, se estableció la Comisión de la Verdad bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Comisión presentó su informe, *De la locura a la esperanza: los 12 años de guerra en El Salvador: informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador*, el 15 de marzo de 1993.¹⁵ “Con base en amplios testimonios, la comisión determinó que el 85% de los actos de violencia durante el conflicto habían sido perpetrados por agentes del Estado, predominantemente en zonas rurales. Aproximadamente el 5% de los actos de violencia fueron atribuidos al FMLN”. Cinco días después,¹⁶ el 20 de marzo de 1993, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Este derogó el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional, dando prácticamente amnistía a los militares por las numerosas masacres de hombres, mujeres y niños llevadas a cabo durante la estrategia de “tierra arrasada” contra los insurgentes, como la masacre de unas 1,000 personas en El Mozote el 11 y 12 de diciembre de 1981.¹⁷ Varios organismos de derechos humanos, tanto externos como internos a El Salvador, instaron al Estado a derogar esta ley de amnistía general, ya que claramente otorgaba inmunidad a los autores de graves violaciones de los derechos humanos.¹⁸

Dirigentes políticos salvadoreños rechazaron sistemáticamente las solicitudes de anulación de la ley de amnistía general de marzo de 1993. Sin embargo, no fue sino hasta 2016, bajo el Presidente Salvador Sánchez Cerén, que la Corte Suprema derogó la ley de amnistía de 1993,¹⁹ dejando intacta la amnistía para los miembros del FMLN establecidos en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, que hoy sigue vigente. Según expertos, la detención de los Cinco de Santa Marta por parte de la fiscalía sigue siendo inconstitucional por estos motivos.

La detención de los cinco defensores plantea las siguientes preguntas: Dada la falta de pruebas y el tema de la amnistía discutida anteriormente, ¿por qué estos hombres y por qué ahora? Para abordar estas cuestiones, es necesario entender el clima político en El Salvador que surgió con la elección de Nayib Bukele en 2019.

Cinco: El Contexto Político del "Estado de Excepción" de Bukele

Rechazando a partidos políticos anteriores y propugnando “Nuevas Ideas”, Nayib Bukele fue elegido en 2019 con la promesa de restaurar el orden en el país mediante el control de la delincuencia generalizada y la actividad de las pandillas. Bukele primero intentó negociar con los líderes²⁰ de las pandillas (como reveló el Departamento de Justicia de Estados

Unidos²¹ y El Faro²²). Cuando esto fracasó, recurrió a medidas que ahora se han convertido en una fuente clave de su popularidad, así como de críticas generalizadas entre los defensores de los derechos humanos.

En febrero de 2021, el partido político de Bukele, Nuevas Ideas, obtuvo una aplastante victoria en las elecciones legislativas dándole el control efectivo del Congreso de El Salvador. El 5 de febrero de 2020, en una demostración literal de fuerza y por órdenes de Bukele, policías y soldados fuertemente armados en El Salvador, que llevaban rifles y equipo de combate, ocuparon el edificio del parlamento del país para obligar a los legisladores a aprobar un préstamo que favorecía a Bukele.^{23 24}

El 1 de mayo de 2021, un día después tomar control de la Asamblea Legislativa, diputados afines a Bukele, reemplazaron a cinco de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y también al Fiscal General de la República.²⁵ En junio de 2021, la Asamblea nombró a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema, de manera que 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema han sido nombrados por Bukele. Esto, a pesar de que la ley estipula que cualquier nueva Asamblea puede nombrar solo 5 nuevos Magistrados. Además, en septiembre de 2021, la Asamblea aprobó una legislación que requiere que todos los jueces mayores de 60 años se jubilen. También ha introducido reformas legislativas que facilitan la transferencia de jueces y fiscales independientes a nuevos puestos. En conjunto, estas disposiciones dan a Bukele un control casi total del poder judicial. Por último, también en septiembre, la Sala de lo Constitucional dictaminó que en lo sucesivo sería posible que un Presidente se postulara por períodos consecutivos, una disposición prohibida por la Constitución. A pesar de la sentencia, la reelección continua estando prohibida por siete artículos de la Constitución, ya que no han habido las reformas constitucionales necesarias para hacer posible la reelección de un presidente.^{26 27}

El colapso de la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es ampliamente aceptado como perjudicial para el funcionamiento de un Estado democrático y abre el camino a los poderes dictatoriales por parte de un jefe de Estado. Burlándose de las acusaciones de los críticos del gobierno, Bukele escribió en Twitter llamándose a sí mismo "el dictador más cool del mundo".²⁸ El comportamiento posterior de Bukele hace difícil ver el humor en esta declaración. El 27 de marzo de 2022, Bukele convocó a la Asamblea Legislativa y emitió un decreto poniendo al país bajo un "estado de excepción" por 30 días,²⁹ suspendiendo efectivamente los derechos humanos constitucionales y democráticos reconocidos. Esto le hace posible arrestar a personas, negarles representación legal y detenerlas indefinidamente. Este "estado de excepción" se ha renovado mensualmente y sigue vigente hasta la fecha.

Con sus poderes aumentados, Bukele ha podido perseguir la actividad de las pandillas con una virtual mano libre y lo ha hecho con entusiasmo y, en su mayor parte, con el apoyo de la mayoría de la población salvadoreña (las encuestas lo muestran con un apoyo del 90%) y por gran parte de América Latina.³⁰ En este punto, se estima que el 2% de la población de El

Salvador está en prisión, en condiciones espantosas, lo que le dio a El Salvador la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo, a partir de enero de 2023.³¹ Con el fin de acomodar su "éxito", Bukele ha abierto recientemente una nueva prisión denominada "Centro de Confinamiento del Terrorismo", que está diseñada para albergar a 40,000 presos, donde cada celda tiene 100 presos servidos por solo 2 inodoros y 2 lava manos.^{32 33}

El 19 de septiembre de 2023, Bukele se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas (en un salón vacío por más de la mitad) y se jactó de que su gobierno había logrado ser un "punto de referencia mundial" y que representaba un "ejemplo positivo" al reducir la tasa de delincuencia y controlar el comportamiento de las pandillas.³⁴ En el mismo discurso, también se tomó el tiempo de afirmar la independencia de El Salvador para tomar sus propias decisiones. Afirmó que fue la interferencia externa lo que sumió a El Salvador en una guerra civil y la interferencia externa lo que "nos hizo" firmar los "falsos acuerdos de paz". Esa postura contrasta el principio de la soberanía del estado frente al principio de derechos humanos universales y el imperio de la ley; y muestra su desdén por los instrumentos jurídicos sancionados por la ONU que dieron origen, a principios de los 90, a las actuales instituciones democráticas del país.

No cabe duda de que Bukele ha logrado más éxito en el control del comportamiento de las pandillas y la delincuencia en general que otros gobiernos en El Salvador y, de hecho, más que en muchos países latinoamericanos. Es obvio que sus resultados han resonado con la población salvadoreña, lo que hace de su reelección en febrero de 2024 una certeza. Además, en otros países de América Latina se está intentando emular sus métodos. En Guatemala, Perú, Costa Rica, Honduras e incluso en el distante Chile, algunos políticos y muchos en la población miran al "plan Bukele" como una forma de controlar la delincuencia y el comportamiento de las pandillas y algunos están introduciendo "estados de excepción" como una forma de lograrlo.³⁵

Si bien es importante reconocer el logro de Bukele y su resonancia entre los salvadoreños y otros latinoamericanos, es imperativo que reconozcamos que los costos son contrarios a los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Entre estos costos se encuentran el arresto arbitrario y el encarcelamiento indeterminado de personas inocentes a través de la criminalización de los pobres, la persecución de opositores políticos y el desmantelamiento de la sociedad civil, los derechos laborales y la libertad de prensa y medios de comunicación (que son los pilares restantes de la transparencia en un país donde Bukele ahora controla el poder judicial, ejecutivo, legislativo, militar y el Tribunal Supremo Electoral). Además, el Plan Bukele no ataca las causas que llevaron al país al estado actual de violencia, pues continúa aplicando el modelo económico neoliberal que excluye y empobrece a las mayorías populares de la sociedad.

En resumen, el caso de los Cinco de Santa Marta no puede entenderse fuera del contexto más amplio del uso de detenciones arbitrarias como una herramienta política para facilitar la estrategia general de control sobre la sociedad salvadoreña. Tampoco puede entenderse,

como se explica en la siguiente sección, fuera del contexto de la reciente crisis económica de El Salvador y la prohibición histórica de la minería metálica.

Lamentablemente, el levantamiento de la ley general de amnistía aplicable a los militares ha tenido poca repercusión en las víctimas de las numerosas atrocidades perpetradas durante la guerra civil. Por ejemplo, una de las masacres más horrendas de la guerra³⁶ fue la masacre de El Mozote, perpetrada por el infame Batallón Atlácatl, entrenado en Fort Bragg por Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Además de El Mozote, este batallón estuvo implicado en algunas de las violaciones de derechos humanos más bárbaras del conflicto armado de doce años, incluyendo el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y de su ama de llaves y su hija en la Universidad de Centroamérica el 16 de noviembre de 1989.^{37 38}

Este caso es paradigmático de la dificultad de llevar a los autores ante la justicia. Lamentablemente, bajo el régimen de Bukele, esta dificultad sigue existiendo y, según algunos, ha aumentado.³⁹ En 2020, a un juez que intentó ejecutar una orden judicial para acceder a los registros militares relativos a la masacre de El Mozote, se le fue denegada la entrada por parte de los militares. Bukele respaldó a los militares alegando que el juez no tenía autoridad sobre los militares y que solo el presidente podía liberar los archivos. Más tarde publicó un número limitado de archivos, alegando que los otros habían sido destruidos. Claramente, para Bukele no hay ventaja política en enfrentar al ejército ya que, en última instancia, cuanto más "dictatorial" es su comportamiento, más debe depender de su apoyo.

El Mozote volvió a estar en las noticias recientemente cuando el lunes 25 de septiembre de 2023, el periódico El Faro reportó que un juez de Virginia, Estados Unidos, decidió no deportar a Roberto Antonio Garay Saravia, un ex líder del Batallón Atlácatl, que fuera entrenado por los Estados Unidos, presuntamente involucrado en la masacre de El Mozote.⁴⁰ Como razón de su decisión, el juez citó un "expediente de servicio incompleto" para Garay Saravia y la negativa de las fuerzas armadas salvadoreñas de desclasificar los registros internos. Garay Saravia vive legalmente en Estados Unidos desde 2014 y es el primer y único militar salvadoreño en ser arrestado explícitamente por sus vínculos con la masacre.

Aunque Bukele prometió, cuando fue elegido en 2019, abrir archivos militares, se ha negado constantemente a hacerlo. El artículo de El Faro citado arriba continúa afirmando que en los últimos dos años en El Salvador no se ha celebrado ninguna audiencia relacionada con la masacre de El Mozote.⁴¹ De hecho, esto es consistente con la descalificación casual de Bukele de la guerra y cualquier intento de mantener la memoria histórica de las enormes pérdidas y del persistente dolor y angustia de los sobrevivientes. Esto explica por qué en diciembre de 2020, eligió a El Mozote, frente a los sobrevivientes de la masacre, para dar un controvertido discurso en el que describió el conflicto de 12 años y los Acuerdos de Paz de Chapultepec que lo terminaron como "una farsa".⁴²

El caso de los Cinco de Santa Marta está siendo liderado por una unidad especial de crímenes de guerra creada por la Fiscalía General de la República, llamada Unidad de Investigación de Crímenes Cometidos Durante el Conflicto Armado. Significativamente, ni un solo caso que involucre a los militares ha sido procesado con éxito por esta unidad a pesar de que las Naciones Unidas han encontrado que al menos el 85 por ciento de los crímenes cometidos durante la guerra civil, incluyendo la masacre de El Mozote, fueron cometidos por militares.⁴³

Durante nuestra visita a Santa Marta, se informó a miembros de nuestra delegación que, en 2022, investigadores de la Fiscalía General de la República entrevistaron a sobrevivientes de las diferentes masacres ocurridas en Cabañas durante la guerra civil. Según testimonios, los residentes de Santa Marta son sobrevivientes de varias masacres importantes ocurridas en Cabañas durante los años de conflicto armado: la masacre del río Lempa tuvo lugar entre el 15 y el 17 de marzo de 1981, donde al menos 200 personas fueron asesinadas;⁴⁴ la masacre de Santa Cruz, donde un número indeterminado de personas (posiblemente cientos) fueron asesinadas durante una incursión militar que tuvo lugar entre el 11 y el 17 de noviembre de 1981⁴⁵; la masacre del caserío Los Planes del cantón de Santa Marta que ocurrió en junio de 1980⁴⁶ y la masacre de San Gregorio que tuvo lugar en diciembre de 1981.⁴⁷

Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos como Tutela Legal María Julia Hernández y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, familiares y sobrevivientes han exigido durante las últimas tres décadas que la Fiscalía General de la República de El Salvador investigue las masacres para llevar verdad y la justicia para las víctimas. El 18 de marzo de 2021, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar Serrano, emitió un comunicado instando al gobierno de Nayib Bukele a emitir una disculpa en nombre del gobierno a las víctimas de la Masacre del río Lempa y dar instrucciones al Fiscal General para iniciar una investigación para deducir responsabilidades administrativas y penales.⁴⁸ Irónicamente, y a pesar de la abrumadora evidencia, la investigación realizada por los investigadores de la Fiscalía en Santa Marta no dio lugar a cargos contra los comandantes militares responsables de las masacres. En cambio, optaron por fabricar cargos contra quienes habían sido obligados a tomar las armas para defender a la población contra las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por el ejército salvadoreño y los cuerpos de seguridad.

Este trasfondo de la actitud de Bukele hacia la guerra, los Acuerdos de Paz y su desdén hacia los sobrevivientes del conflicto nos permite volver a nuestra pregunta anterior con respecto a los Cinco de Santa Marta: ¿Por qué estos hombres, y por qué ahora?

Seis: Evidencia de que el Régimen de Bukele Quiere Reiniciar la Minería

El Salvador se convirtió en 2017 en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, por ser una industria notoriamente contaminante e intensiva en el uso del agua y su severo impacto en el principal bien hídrico del país - El Río Lempa- en la agricultura, la ganadería, la industria de alimentos y la generación de energía hidroeléctrica. Esta valiente acción de un pequeño país que durante mucho tiempo ha sido blanco de una industria minera rapaz y depredadora es bastante notable. Su historia ha sido examinada de cerca por Robin Broad y John Cavanagh,^{49 50 51} y otros.^{52 53 54} A continuación, figura un breve resumen de su trabajo.

A medida que el precio del oro a principios de los años 2000 comenzó a elevarse, la veta de oro que fluye desde México a través de Centroamérica atrajo la atención de corporaciones mineras de Canadá, Estados Unidos y Australia.⁵⁵ Pronto, sin embargo, comenzó a surgir una comprensión de la inminente amenaza entre aquellos cuyas vidas y medios de subsistencia se vieron más drásticamente amenazados por la minería industrial. Territorios clave donde creció esta conciencia en El Salvador fueron los departamentos norteños de Cabañas y Chalatenango. Cuando los prospectores mineros llegaron al territorio, líderes comunitarios viajaron a Honduras y Guatemala donde fueron testigos de la devastación que acompañó a la minería a cielo abierto, donde montañas enteras fueron destruidas y quedaron grandes estanques de relaves tóxicos y ríos muertos. De este grupo surgió en 2005 la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador, conocida simplemente como La Mesa.⁵⁶

Una de las organizaciones que se interesó e involucró en la lucha contra la minería fue la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), cuyo interés en la preservación del agua condicionó su actitud hacia la minería. ADES tiene sus raíces en la pequeña comunidad de Santa Marta en el extremo norte de Cabañas. Bajo amenaza de incursiones militares, la mayor parte de la comunidad fue evacuada al campamento de refugiados Mesa Grande, en Honduras, durante la guerra. Al regreso de la población, después de la guerra, se formó el Comité de Repobladores de Cabañas y Cuscatlán (CRCC) para satisfacer las necesidades de la población que regresaba. De este comité surgió ADES en 1993.⁵⁷ ADES es un grupo extremadamente organizado que proporciona liderazgo en la organización comunitaria, "soberanía alimentaria y agroecología" y "gestión integral del agua y el saneamiento".⁵⁸ Trabajando con su organización hermana -Radio Victoria- nacida en el mismo año, ADES rápidamente asumió el tema del agua a nivel nacional y esto significó también asumir la lucha contra la minería.

Su mayor éxito público comenzó en 2006 con la resistencia a una empresa minera canadiense-australiana (primero Pacific Rim, adquirida por OceanaGold en 2013) que amenazaba con contaminar los recursos hídricos del país. A petición de comunidades locales y de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), ADES y Radio Victoria acompañaron la protesta contra la propuesta mina de oro El Dorado cerca de San Isidro,

Cabañas. La lucha de 12 años transformó una protesta local en un movimiento nacional con apoyo internacional.⁵⁹

Esta lucha no estuvo exenta de costos, como recordó Vidalina Morales, presidenta de ADES, a los presentes en el 25 aniversario de la fundación de Radio Victoria y de ADES. Estos costos incluyeron los asesinatos de defensores del agua en 2009: Dora Sorto (embarazada de 8 meses), Ramiro Rivera y Marcelo Rivera.⁶⁰ A pesar de estos y otros costos, el mensaje anti-minería y a favor del agua ganó fuerza en los años siguientes. Antonio Pacheco, uno de los fundadores de ADES, y Vidalina Morales facilitaron la creación de los Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, después de que ella y otros miembros de La Mesa fueran a Washington D.C. para recibir el Premio de Derechos Humanos Letelier Moffitt del Institute for Policy Studies, y así reunir a muchas organizaciones de los EEUU como CIEL, y de Canadá, como MiningWatch. Esta coalición de actores internacionales ha sido fundamental para dar a conocer y brindar apoyo internacional a la lucha ante la minería en El Salvador, así como a la difícil situación actual de los cinco líderes de Santa Marta.^{61 62}

Desde el principio, La Mesa y ADES continuaron vinculando sus procesos de educación sobre la minería con la actual crisis hídrica que sufre El Salvador; un tema cercano a las preocupaciones del pueblo salvadoreño ya que más del 60% del agua de El Salvador proviene de la cuenca del Río Lempa, que ya se encuentra altamente contaminada y explotada.⁶³ Finalmente la influyente Conferencia Episcopal de El Salvador se unió a la lucha y hasta el día de hoy ha permanecido en oposición a la minería. En esa época, las cosas se volvieron más difíciles para Pacific Rim. Su subsidiaria Pac Rim en El Salvador (PRES), solicitó en diciembre de 2004 convertir sus licencias de exploración, que debían expirar en enero de 2005, en una concesión de explotación. La solicitud de licencia de explotación — es decir, el derecho a explotar el recurso natural en lugar de solo explorar- no incluyó ciertos documentos requeridos por la Ley Minera de El Salvador, como el permiso medioambiental y el consentimiento de los propietarios de los bienes situados en la superficie de la concesión solicitada.⁶⁴ En 2006, la oposición a la minería era lo suficientemente fuerte como para que la solicitud de una licencia de explotación por parte de Pac Rim El Salvador fuera puesta en suspenso por el entonces gobierno conservador de ARENA del presidente Antonio "Tony" Saca.⁶⁵

Desde 2007, las encuestas de opinión de la Universidad de Centroamericana en San Salvador mostraron que más del 60% de la población salvadoreña estaba en contra de la minería metálica, y los sucesivos gobiernos del FMLN en 2009 y 2014 continuaron la moratoria virtual.⁶⁶ Esto, sin embargo, también llevó a Pac Rim El Salvador a presentar una demanda contra El Salvador exigiendo ser compensada por la pérdida de "ganancias proyectadas" en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo del Banco Mundial.⁶⁷ Durante estos largos procedimientos legales, Pacific Rim fue adquirida por la corporación minera australiana OceanaGold, que aumentó la demanda a más de 300 millones de dólares. La batalla finalmente terminó en un fallo favorable para El Salvador, pero a un costo de más de 12 millones de dólares. En esta rara derrota en el CIADI para una

corporación, también se le otorgó a El Salvador US\$8 millones a ser pagados por OceanaGold.^{68 69}

Tras el fallo del tribunal del CIADI en contra de OceanaGold, en la lucha por defender el agua se continuó presionando para tomar medidas legislativas, lo que llevó a la histórica votación en 2017 que convirtió a El Salvador en la primera nación del mundo en prohibir la minería para salvar sus ríos.⁷⁰ Para el gran crédito de los y las defensoras del agua, una subsecuente encuesta de la Universidad de Centroamérica en 2015 reveló que cerca del 80 por ciento del público se oponía a la minería.⁷¹ Esto debería dar una pausa a cualquier gobierno salvadoreño que contemple la revocación de la prohibición de la minería metálica.

A pesar de este fuerte apoyo a la prohibición de la minería, la delegación escuchó de varias organizaciones que hay fuertes indicios de que el régimen de Bukele pretende reiniciar la minería. Una fuente informó de una reunión en 2020 en la que Bukele preguntó sobre las perspectivas de reiniciar la minería. Otros sugirieron que las actuales negociaciones secretas de un acuerdo de libre comercio entre El Salvador y China incluyen la posibilidad de invertir en el sector minero. Si bien las afirmaciones anteriores no pueden ser verificadas, sabemos que en 2021 el Ministerio de Economía incluyó en sus objetivos estratégicos, la regulación de la minería. Nos enteramos de que el gobierno de Bukele se ha unido al Foro Intergubernamental sobre Minería financiado por el gobierno canadiense y le ha pedido que realice una evaluación del sector minero del país. Bukele también ha aprobado una nueva ley para crear una nueva Dirección de Hidrocarburos, Energía y Minas que incluye la minería de metales a pesar de estar prohibida en otra ley.⁷²

Las acciones posteriores del gobierno parecen estar instalando capacidad administrativa para la reintroducción de la minería: en el presupuesto de 2023 el ejecutivo asignó 4.5 millones de dólares para modernizar las leyes mineras y energéticas y⁷³ de acuerdo con las proyecciones presupuestarias de 2024, el gobierno agregará 140 miembros del personal a la Dirección de Hidrocarburos Energía y Minas.⁷⁴ En cabañas, una parcela de tierra autorizada a las empresas mineras antes de la prohibición se vendió el año pasado a la empresa agrícola San José, una empresa anónima que ostensiblemente compró el terreno para fines de agricultura en una zona que está clasificada como la tierra menos cultivable de El Salvador.⁷⁵

¿Por qué un país que recientemente ha ganado una demanda multimillonaria iniciada por la empresa Pacific Rim de Canadá y completada por OceanaGold de Australia estaría interesado en reiniciar la⁷⁶ minería? ¿Por qué un país que ha prohibido la minería metálica estaría interesado en estas iniciativas?

La detención de los cinco defensores del agua de Santa Marta asocia la prohibición de la minería con la guerra civil que Bukele ha caracterizado como una despreciable pérdida de tiempo y una pérdida inútil de vidas. Esta estrategia está orientada a empañar la reputación de defensores del agua que lucharon en la guerra civil con cargos de asesinato, mientras diluye el mérito percibido por su activismo en torno a la minería y los margina del

movimiento de oposición a la reapertura de la minería en El Salvador. Este patrón de criminalización contra defensores del medio ambiente es un *modus operandi* bien establecido por los gobiernos de la región centroamericana⁷⁷ para propagar el miedo entre las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.

Otros con quienes nos reunimos observaron la intención de Bukele de revertir la prohibición minera en El Salvador y sugirieron que su motivación para hacerlo se basa en el pobre desempeño de la economía salvadoreña, exacerbado por las importantes pérdidas económicas sufridas por El Salvador después de su elevación del Bitcoin (junto con el dólar estadounidense) como moneda nacional.⁷⁸

Bajo el gobierno de Bukele, El Salvador ha adquirido la mayor deuda pública de la región centroamericana; 83,7% del producto interno bruto según el Banco Central de Reserva⁷⁹; ha registrado el menor crecimiento económico de la región, 2,1% según la CEPAL⁸⁰, y en 2022 cerró con una disminución del -133% en la inversión extranjera directa comparada con el año anterior.⁸¹

El marketing de Bukele vende la imagen de El Salvador como un país exitoso en camino a convertirse en "el Singapur de Centroamérica", pero el sabe que los indicadores económicos cuentan una historia diferente que podría en cualquier momento estallar su burbuja al popularidad, sobre todo porque los más afectados por la desaceleración económica del país son los que habían puesto esperanzas en su partido "Nuevas Ideas". Según un informe publicado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, 1,868,206 de personas, o el 29,5% de la población, vivían por debajo del umbral de pobreza en 2022, un aumento del 6.24% en comparación con 1,758,434 en 2021. La situación podría empeorar en 2024, ya que el gobierno ha anunciado más de 100 millones de dólares en recortes presupuestarios a servicios sociales, salud y educación.⁸²

El panorama de la economía fallida pinta a El Salvador con la necesidad de atraer inversión extranjera para estimular el crecimiento económico. Muchos activistas entrevistados argumentan que es esa desesperación la que impulsa a Nayib Bukele a hacer una apuesta de alto riesgo de revertir la prohibición minera.

Tras la detención de los cinco defensores del agua de Santa Marta, ha habido una reacción mundial que probablemente sorprendió al gobierno de Bukele. En una respuesta notablemente rápida en los días siguientes a las detenciones de enero de 2023, 251 organizaciones de 29 países que apoyan el trabajo de los y las defensoras salvadoreños del agua emitieron una declaración que vincula específicamente los arrestos con la supuesta intención del gobierno de Bukele de reabrir la minería en El Salvador.⁸³ El America's Policy Group en Canadá también reunió una lista de 37 organizaciones que advirtieron "que la detención continua de los defensores del agua es una violación directa del Acuerdo de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional de El Salvador de 1992".⁸⁴ La carta citaba a Luis Parada, el abogado internacional que defendió los intereses de El Salvador en la demanda de Pacific

Rim/OceanaGold, quien calificó el caso de "falta total de pruebas", "incumplimiento del debido proceso" y "encubrimiento". En mayo de 2023, la Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, emitió una declaración conjunta con el Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; y el Relator Especial sobre los derechos al agua potable y saneamiento y pidió que se liberara a los cinco dirigentes comunitarios de Santa Marta.⁸⁵

En julio de 2023, 17 miembros del Congreso de los Estados Unidos encabezados por los congresistas Mark Pocan y Jim McGovern escribieron una fuerte carta a Anthony Blinken, Secretario del Departamento de Estado, exponiendo claramente su preocupación por el error judicial que supone la detención de los Cinco y vinculando la detención a la cuestión minera. En agosto de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno salvadoreño para investigar una petición de medidas cautelares a favor de los Cinco de Santa Marta solicitada por el equipo de defensa legal.

También hay una gran cantidad de artículos críticos en los medios de comunicación internacionales que expresan preocupación por la situación de los derechos humanos y el estado de derecho.⁸⁶ Esta reacción mundial puede ser una explicación parcial de por qué los Cinco han sido liberados bajo arresto domiciliario y por qué esa decisión del juez de primera instancia no ha sido impugnada por la Fiscalía General de la República de El Salvador. Sin embargo, los cargos contra los cinco defensores continúan y una audiencia está programada para febrero de 2024.

Siete: Resumen sobre las Valoraciones de la Situación Actual en El Salvador: De la Violencia de Pandillas a la Violencia Patrocinada por el Estado

Nuestras entrevistas en El Salvador indican que, trágicamente, el país es ahora un estado policial. Además de los militares y la policía, Bukele controla tanto la legislatura como el poder judicial y su continuo "estado de excepción" le da el control absoluto. Se nos informó de la presencia de "líneas de soplones" a través de las cuales miembros del público pueden informar sobre la actividad de sus vecinos y estos informes son seguidos por la policía y los militares. En cada pueblo que visitamos, vimos grupos de tres a cuatro miembros del ejército generalmente acompañados por la policía patrullando calladamente las calles, aparentemente en busca de pandilleros.

Como mencionamos anteriormente, la popularidad de Bukele en El Salvador es el resultado del alivio que sienten muchos salvadoreños de que la actividad de las pandillas que amenazó a la población durante los últimos 20 a 30 años ha reducido, al menos por el momento. Sería un error subestimar la fuerza de esta sensación de alivio en muchos salvadoreños cuyas vidas han estado limitadas por tanto miedo y ansiedad debido a la violencia y las amenazas de las pandillas en el país. Uno puede apreciar la sensación de libertad para moverse por las

calles sin preocuparse por estar atrapado en la actividad de miembros de pandillas rivales que defienden su territorio, o de poder ser asesinado, o que sus hijos podrían ser reclutados para actividades de pandillas. Del mismo modo, las empresas por primera vez en mucho tiempo pueden operar sin que se les exija pagar "renta" o enfrentar la violencia o la muerte por parte de las pandillas. A pesar de este alivio y el sentido de gratitud hacia Bukele por parte de muchas personas, un número de personas - particularmente aquellos o cuyos miembros de su familia han sido víctimas de las detenciones e intimidación de Bukele - están comenzando a aprender cuales son los costos en términos de sus libertades democráticas. Las denuncias de las víctimas tienen eco en organizaciones de derechos humanos y líderes sociales que denuncian que no existe una política real de seguridad pública y no se atacan las causas estructurales de la violencia.⁸⁷

Durante nuestra investigación sobre las circunstancias que rodearon la detención de los Cinco de Santa Marta, tuvimos la oportunidad de viajar a San Isidro y Santa Marta en el departamento de Cabañas. San Isidro es el sitio de la antigua mina de oro El Dorado que funcionó desde 1948 hasta 1953. A principios de los años 2000, Pacific Rim intentó reabrir la mina y, aunque inicialmente se le concedió una licencia de exploración, se le negó una licencia de explotación debido a la oposición de la comunidad. Como se mencionó anteriormente, San Isidro también fue el hogar del primero de cuatro activistas anti-mineros asesinados, Marcelo Rivera.⁸⁸ Allí, pudimos hablar con varios miembros de la comunidad. Su relato de las desesperadas condiciones financieras que enfrenta su municipio se repite en los municipios de todo el país y se analizará más adelante.

En Santa Marta, pudimos ver de primera mano el trabajo que la comunidad está haciendo en agroecología y visitar sus invernaderos orgánicos y aprender sobre su impresionante éxito en la producción hidropónica de verduras. También nos enteramos del terror que esta comunidad experimentó cuando Santa Marta fue invadida por militares en busca de pandilleros en agosto de 2023; ese mes, Bukele envió 7,000 militares y 1,000 policías al departamento.⁸⁹ Esa presencia de militares fuertemente armados traumatizó a muchos de los habitantes de Santa Marta que se habían visto obligados a huir al campamento de refugiados de Mesa Grande en Honduras durante la guerra, después de presenciar la masacre de familiares y amigos cercanos. Líderes comunitarios también expresaron sus temores sobre el posible incremento de la migración, especialmente de la generación más joven, que estas acciones militares podrían causar en la comunidad.

Asimismo, nos enteramos que, en el municipio de Cinquera, Cabañas, normalmente un pueblo tranquilo sin la presencia de pandillas o delitos graves, los militares exigieron la entrada a la casa comunal. Cuando se les dijo que no estaba disponible, simplemente la ocuparon durante la noche y sin permiso de la comunidad se quedaron durante semanas.⁹⁰ En el cantón cercano de El Cacao, los soldados estuvieron estacionados en la casa comunal durante más de un año.⁹¹ Esta intrusión militar refleja escenas similares en innumerables pueblos y aldeas a lo largo de El Salvador mientras la guerra de Bukele contra las pandillas se desarrolla. Para muchos, especialmente para aquellos que han sufrido el trauma psicológico

de la política de “tierra arrasada” empleada por los militares durante el conflicto armado, el resultado fue y sigue siendo uno de terror absoluto.

En general, nos sorprendió el nivel de miedo, sufrimiento y corrupción en el país. Miedo porque las detenciones son tan arbitrarias y repentinas que muchos padres temen cada noche que sus hijos adolescentes puedan ser arrestados. Al menos en el norte del país, como se mencionó, este temor ha llevado a un aumento de la emigración hacia los Estados Unidos, en particular por parte de jóvenes. Por ejemplo, el mes de mayo pasado en la comunidad de Santa Marta fue detenido Manuel Gamez, hijo de la reconocida defensora de derechos humanos Vidalina Morales. Manuel fue detenido por la Policía Nacional Civil y liberado después de 40 horas, debido a la presión nacional e internacional, sin ninguna explicación y ningún cargo en su contra.⁹² También hay temor en los movimientos sociales porque los líderes de los movimientos y la gente común están siendo detenidos cuando hablan en contra de Bukele (incluidos trabajadores municipales que denuncian de que no se les está pagando). Nos enteramos de que hay al menos 17 líderes sindicales que fueron arrestados bajo el estado de excepción y continúan en la cárcel.⁹³ Otros trabajadores han tenido sus salarios recortados o han perdido sus salarios y si se quejan, han sido despedidos y algunos arrestados. También nos dijeron que la situación laboral en El Salvador no es bien conocida fuera del país porque algunos periodistas también han sido arrestados o acosados hasta el punto de que han abandonado el país por su propia seguridad. También hay miedo porque los poderes de Bukele son absolutos, y está expandiendo el ejército en un país sin amenazas externas. Y la población sufre porque los precios de los alimentos están subiendo, mientras los presupuestos gubernamentales para la salud, la educación, la agricultura se están reduciendo, lo que genera problemas en el pago de los salarios del personal.

El 14 de junio de 2023, Bukele emitió una ley de reorganización radical de la estructura de los gobiernos municipales. Los municipios se están reduciendo de 262 a 44. Mientras que Bukele afirma que este movimiento es simplemente para ahorrar costos, otros creen que también es manipulación y otro método de consolidación de su poder, ya que muchos de los municipios de oposición ahora encontrarán sus voces sumergidas en entidades políticas más grandes. CISPEs ha resumido recientemente las consecuencias de estas limitaciones:⁹⁴

..... más de 20.000 trabajadores públicos han sido despedidos ilegalmente desde que Bukele asumió el cargo. La mayoría trabajaba en instituciones nacionales, mientras que 25 municipios despidieron a 4,444 trabajadores en total y alrededor de 2.500 fueron despedidos de la Asamblea Legislativa. Esta reducción de la fuerza de trabajo pública ha resultado en la eliminación de 10 sindicatos.⁹⁵

Tememos que se avecina una verdadera crisis de hambre. Bukele se enfrenta a una crisis fiscal/económica, y se está ocupando de ella eliminando los municipios y recortando los presupuestos municipales (la municipalidad de San Isidro mencionada anteriormente solía recibir 157,000 dólares al mes del Gobierno, y ahora recibe 27,000 dólares), lo que significa despidos masivos en las ciudades, acumulación de basura, y una economía en ruinas

sostenida solo por las remesas. Más de una quinta parte de la población de El Salvador vive en Estados Unidos y sus remesas representaron el 25 por ciento del PIB en 2021.⁹⁶

También nos enteramos de la creciente evidencia de corrupción en torno a los préstamos externos que llegan al país. En 2020, El Salvador recibió un préstamo de emergencia de 389 millones de dólares del FMI para el alivio inmediato de la pandemia COVID 19. Luego de ese préstamo, el entonces Fiscal General de la República, Raúl Melara, inició una investigación criminal que se conoció como Operación Catedral. Esta reveló una compleja red de prácticas fraudulentas en varios departamentos de la administración de Bukele que fueron supervisadas por tres de los hermanos de Bukele; Karim, Ibrajím y Yusef, así como su primo y jefe de Nuevas Ideas, Xavier Zablah.⁹⁷ Cuando el bloque legislativo pro-Bukele reemplazó a Melara el 1 de mayo de 2021, por Rodolfo Delgado, este último rápidamente disolvió la investigación.⁹⁸ La Asamblea Legislativa controlada por Bukele más tarde aprobó una ley que bloquea cualquier escrutinio de las compras relativas a la pandemia por parte de las agencias gubernamentales y otorga inmunidad a los acusados de malversar fondos de ayuda para el Covid 19.⁹⁹

También existe un gran temor de que la crueldad de Bukele, demostrada los continuos arrestos bajo el "estado de excepción", empeore aún más después de su reelección programada para el 4 de febrero de 2024, porque entonces no tendrá que apaciguar a nadie. Tendrá cinco años de control absoluto y posiblemente más. Por lo tanto, existe la sensación de que la influencia externa y la presión para poner fin al "estado de excepción" y retirar los casos legales injustos serán más eficaces antes de las elecciones. La presión externa puede tener menos impacto después de las elecciones.

Como se mencionó, también pudimos entrevistar a miembros de Tutela Legal María Julia Hernández y MOVIR (Movimiento de Víctimas del Régimen), otro grupo de derechos humanos que está hablando sobre los abusos de la justicia fundamental inherente a la política de "mano dura" de Bukele para combatir el crimen de pandillas.

Las condiciones descritas por Tutela Legal y MOVIR son horribles. La gente describe la situación carcelaria en términos tortura y campos de concentración: la comida es horrible, las celdas están hacinadas, el ruido es constante, y las luces están encendidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y, cuando un preso rompe las reglas, todo el mundo es castigado; por ejemplo, obligando a todo el mundo a hacer volteretas en pisos de concreto durante una hora, castigando cada hueso en cuerpos exhaustos y demacrados. Debería prestarse mucha más atención a estas acciones y condiciones abismales. Hay informes de que más de 150 personas han muerto en prisión desde el inicio del "estado de excepción" y que cuando las familias finalmente tienen acceso a sus seres queridos, muchos de los cuerpos muestran señales de palizas y tortura física. El número exacto de muertes es difícil de evaluar porque las autoridades penitenciarias a menudo no notifican directamente a los familiares de las muertes; la familia sabe solo cuando se les llama la morgue o una casa funeraria para recoger el cuerpo.

El gobierno de Bukele ha atacado a activistas, opositores políticos, líderes sindicales, críticos y periodistas con la misma intensidad. La presencia de Bukele en las redes sociales se ve reforzada por un ejército de trolls de apoyo que reproducen la propaganda de su gobierno. El conocido y respetado medio de noticias críticas en línea, El Faro, tuvo que trasladar sus operaciones administrativas y legales a San José, Costa Rica, tras el implacable acoso del gobierno, aunque su sala de redacción permanece en El Salvador.¹⁰⁰

En resumen, la detención y encarcelamiento arbitrarios de los Cinco de Santa Marta es solo la punta del iceberg de la injusticia y la inhumanidad en El Salvador. Lo que nuestra delegación aprendió es que el gobierno de El Salvador ha avanzado sistemáticamente en el camino de convertirse en un régimen autocrático y autoritario. El hecho de que esto esté sucediendo con el reconocimiento tácito de muchos de los salvadoreños no es razón para la complacencia. Las naciones que deseen continuar o aumentar los lazos económicos con El Salvador, ya sea para abrir espacio para la reanudación de la minería canadiense o desalentar los coqueteos de Bukele con China, y el acuerdo de libre comercio propuesto,¹⁰¹ no deben hacer caso omiso de sus ataques a la democracia. Si bien es la primera prioridad de la delegación entender sobre el caso legal contra los Cinco de Santa Marta,¹⁰² este objetivo ahora está vinculado a la necesidad más amplia de exponer a nuestros gobiernos y al público la profundidad de los peligros de la dictadura de Bukele, especialmente a aquellos que se encuentran en prisión o victimizados por el Gobierno.

Ocho: Recomendaciones

La delegación se mostró sumamente alarmada por el hecho de que, ante el avance hacia un gobierno autoritario y la corrupción y falta de transparencia del gobierno de Bukele - en medio de los abusos en contra de los derechos humanos - ni los gobiernos de Estados Unidos ni de Canadá, ni la Unión Europea u otros, se pronuncien públicamente en favor de la necesidad de que se realicen importantes cambios hacia la democracia. Algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos y del Parlamento de Canadá han sido críticos, pero las ramas ejecutivas de ambos gobiernos están ahora en silencio.

Ningún gobierno se ha comprometido a presionar para que se retiren los cargos contra los cinco defensores del agua. Ni protestar contra las decenas de miles de personas inocentes en la cárcel. Tampoco plantean preocupaciones públicas sobre el continuo estado de excepción.

La delegación se pregunta, ¿por qué el cambio de política?. Cuando el partido Nuevas Ideas de Bukele ganó, en febrero de 2021, 64 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa, y procedió a destituir y reemplazar a cinco magistrados de la corte suprema, así como al Fiscal General, hubo una protesta internacional que incluyó a varios miembros del gobierno de los Estados Unidos.¹⁰³ El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, llamó al Presidente Bukele y expresó su "grave preocupación" y le recalcó el hecho de que "un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática." La

vicepresidenta estadounidense Kamala Harris también expresó su preocupación en un tuit. Internacionalmente, Human Rights Watch se refirió a la medida como “un asalto a la democracia”. En ese momento, Bukele respondió a las críticas internacionales tuiteando que, “... con el debido respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es asunto tuyo”.¹⁰⁴

Los miembros de esta delegación se preguntan: ¿Dónde están estas voces ahora que cada pilar significativo de la democracia en El Salvador ha sido desmantelado por el gobierno de Bukele?

Inexplicablemente, en el verano de 2023, el gobierno de Estados Unidos ha cambiado su posición para acomodar a Bukele. Se había pronunciado claramente sobre los planes de Bukele de permanecer ilegalmente en el cargo hace dos años¹⁰⁵ - y ahora nada. En los últimos meses, hemos visto un aumento en el nivel de apariciones públicas entre el Departamento de Estado de los EE.UU. y funcionarios públicos salvadoreños, incluido el Secretario Blinken dando la bienvenida a la Ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña Alexandra Hill en Washington DC con una conferencia de prensa. ¿Qué mensaje envía esto unos meses antes de una elección en la que Bukele se presenta inconstitucionalmente? EE.UU. ha sido un participante activo en los sistemas de seguridad y prisiones de El Salvador durante décadas y el nivel vertiginoso de violaciones de los derechos humanos parece no haber tenido ningún impacto en el continuo apoyo de EE.UU. En octubre de 2023, EE.UU. donó dos helicópteros y otro equipo militar en una importante sesión fotográfica con la Embajada. Asimismo, el gobierno canadiense guarda silencio; nos enteramos de que por lo menos hay un canadiense en la prisión de Bukele mientras empresas mineras canadienses sin duda se regocijan sobre la perspectiva de la revocación de la prohibición de la minería.

Y actualmente ni el gobierno estadounidense ni el canadiense se oponen a un préstamo de 1,300 millones de dólares que Bukele está negociando con el FMI.¹⁰⁶ Anteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FMI expresaron gran renuencia al préstamo, citando la falta de transparencia presupuestaria y la adopción de Bitcoin por El Salvador como moneda de curso legal. Sin embargo, el cambio de actitud de la administración estadounidense hacia Bukele, que lo acepta a pesar de que viola la Constitución, suspende las libertades civiles y socava los controles democráticos del poder ejecutivo, ha coincidido con las señales de los funcionarios del FMI de que se acercan a un acuerdo sobre el préstamo. Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo recientemente que “El compromiso con El Salvador ha sido muy productivo. Teníamos una misión allí, una misión de negociación, pero sabíamos que sería un primer paso. Todavía no estamos ahí.” Agregó que antes de que se pueda lograr un acuerdo se necesitan “ciertas medidas estructurales”.¹⁰⁷

Tenemos grandes preocupaciones de que este préstamo solo financiará más represión y corrupción, y que gran parte del dinero será mal utilizado o malversado por funcionarios allegados de Bukele, al igual que los préstamos anteriores. Por ejemplo, en 2021, El Salvador

recibió un préstamo de US\$600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para brindar alivio a las pequeñas empresas afectadas negativamente por la pandemia de COVID. Una investigación del Proyecto de Denuncias de Crimen Organizado y Corrupción encontró que Bukele desvió US\$200 millones de ese préstamo para pagar la adopción de Bitcoin.¹⁰⁸

De ahí nuestras recomendaciones:

Al Gobierno de El Salvador: Basado en los principios de respeto al Estado de Derecho, debido proceso, democracia y derechos humanos, y compromiso con la protección de los actores de la sociedad civil en El Salvador, incluidos los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, le instamos a:

- Retirar los cargos contra los Cinco de Santa Marta;
- Retirar el estado de excepción; e implementar una verdadera política de seguridad pública.
- Restablecer los derechos de la población actualmente suspendidos;
- Restablecer la independencia de los diferentes poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
- Mantener la prohibición de la minería metálica.

A los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, les instamos a abogar por el retiro de los cargos contra los 5 de Santa Marta basados en:

- los principios del respeto del Estado de Derecho, el debido proceso, la democracia, los derechos humanos y el compromiso con la protección de los actores de la sociedad civil en El Salvador, incluidos los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente
- El Acuerdo de Paz de 1992 y la Ley de Reconciliación Nacional, aprobados una semana después del histórico Acuerdo de Paz, siguen en vigor hasta la fecha. Esta ley fue aprobada como cumplimiento de los compromisos suscritos por el Gobierno de El Salvador, el FMLN y el Secretario General de las Naciones Unidas, con el pleno apoyo de gobiernos como Canadá, Estados Unidos, México, España, Colombia y Venezuela. Es fundamental que se mantenga el Acuerdo de Paz de El Salvador, ya que ha dado forma en gran medida a los acuerdos de paz posteriores en la región y en todo el mundo.

Además, le instamos a:

1. Asistir como observadores internacionales a las próximas audiencias de los defensores. Si no es posible asistir, la solicitud de la Embajada de asistir sería una demostración significativa de interés y preocupación internacional.

-
2. Exigir el retorno a la democracia en El Salvador, la cancelación del "estado de excepción" y el restablecimiento de la independencia de los distintos poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
 3. Instruya a los Directores Ejecutivos del FMI de Estados Unidos y Canadá que voten en contra de la solicitud de Bukele de un préstamo de 1,300 millones de dólares.

Al Gobierno de Canadá, le instamos a que aplique estas recomendaciones como parte integral de "Voces en Riesgo: Directrices del Canadá sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos".¹⁰⁹ En esas directrices se reconoce el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en la protección y promoción de los derechos humanos, el agua y el medio ambiente y el fortalecimiento del estado de derecho, a pesar de el riesgo para ellos mismos, sus familias y sus comunidades, y las organizaciones y movimientos que representan.

Al Gobierno de los Estados Unidos, le instamos a implementar diligentemente el comentario del Subsecretario de Estado Nichol, en octubre de 2023 en IDHUCA, sobre el "compromiso inquebrantable del gobierno de los Estados Unidos de apoyar y proteger a los actores de la sociedad civil en El Salvador." Esto debería incluir la petición inmediata del gobierno de Estados Unidos para retirar el caso legal contra los cinco defensores del agua y liberar a los líderes sindicales de la prisión.

Al gobierno de México (y España, Colombia y Venezuela):

- Declare su intención de proteger los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz firmado en 1992 en la Ciudad de México. Fue negociado bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas y firmado por representantes del gobierno de El Salvador y la insurgencia del FMLN.
- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe sostener lo expresado en mayo de 2022, cuando visitó El Salvador, que México propuso la creación del Grupo de Contadora, a través del cual se logró la paz, y "que es motivo de orgullo para nosotros los mexicanos, porque esos acuerdos fueron firmados en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México".
- México debe liderar la defensa del Acuerdo de Paz e instar a España, Colombia y Venezuela, que actuaron como amigos del Secretario General en el proceso de paz, a liderar también.

NOTAS FINALES

1. Lakani, Nina (2013, 14 de enero) " Defensores ambientales salvadoreños detenidos por crímenes de décadas". <https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/30/el-salvador-makes-history-first-nation-to-impose-blanket-ban-on-metal-mining>
2. United Nations Peacemaker, 1992 " Acuerdo de Chapultepec" <https://peacemaker.un.org/elsalvador-chapultepec92>
3. Para un examen minucioso y excelente de la lucha anti-minera de El Salvador, véase también Robin Broad y John Cavanagh (2021) *The Water Defenders*, Beacon Press
4. Palumbo, Gene y Elisabeth Malkin (19 de marzo de 2017) "El Salvador, Preciando el agua sobre el oro, prohíbe toda minería de metales." *The New York Times* <https://www.nytimes.com/2017/03/29/world/americas/el-salvador-prizing-over-gold-bans-all-metal-mining.html>
5. Gatehouse, Mike (2023, 1 de febrero) "Detienen a los defensores del agua de El Salvador - ador-water-defenss-arrested/#:~:text=The%20ofive%20oare%20accused%20by,the%20daughter%20of%20the%20victim.
6. Dinur, Esty (2023, 6 de agosto) "El crimen de luchar por una vida mejor: En El Salvador, defensores del medio ambiente y líderes cívicos opuestos a la minería están siendo arrestados. *The Progressive Magazine* <https://progressive.org/magazine/the-crime-of-fighting-for-a-better-life-dinur-2023-0806/>
7. Radwin, Maxwell (2 de agosto de 2023) "La comunidad internacional pide la liberación de los activistas antimineros de El Salvador." *Mongabay* <https://news.mongabay.com/2023/08/international-community-calls-for-rele-of-salvador-antimining-activistas/>
8. El Movimiento Wisconsin Rescata al Pueblo (2023 Septiembre 3) "El Salvador: Los Defensores del Agua de Santa Marta y ADES Bajo Arresto mientras la lucha para que sus cargos sean desestimados continúa. <https://wibailoutpeople.org/2023/09/07/the-santa-marta-and-ades-water-defenss-under-house-arrest-as-the-fight-to-have-sus-cargos-despedidos-continua/>
9. YSUCA (2023, September 25) "Piden sobreseimiento definitivo para líderes de Santa Marta" YSUCA, <https://ysuca.org.sv/2023/09/piden-sobreseimiento-definitivo-para-lideres-de-santa-marta/>
10. Embajada de Francia en El Salvador (2016, August 31), XXXV Aniversario de la Declaración franco-mexicana, <https://sv.ambafrance.org/XXXV-Aniversario-de-la-Declaracion-franco-mexicana>

-
11. Stuart, David (1994) "Participación de las Naciones Unidas en el proceso de paz en El Salvador", cap. in *Building International Community*, Kevin Clements y Robin Ward, eds. (St. Leonard's, Australia: Allen & Unwin, 1994) pp. 261-272. <https://www.beyondintractability.org/art/sum/stuart-salvador>
 12. Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas (30 de enero de 1992) "Acuerdo de paz" https://peacemaker.un.org/peacemakees/peacemaker.un.org/files/SV_0116_ChapultepecAgreement.pdf
 13. Cerqueira, Daniel y Leonor Arteaga (2016) "Desafiando la Ley de Amnistía en El Salvador: Alternativas Nacionales e Internacionales para Acabar con la Impunidad" *Due Process of Law Foundation* https://www.dplf.org/sites/default/files/amnest_law-final24june.pdf
 14. *ibid.* Página 6
 15. <https://www.usip.org/sites/default/files/file/ElSalvador-Report.pdf>
 16. <https://www.usip.org/publications/1992/07/truth-commission-el-salvador>
 17. Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (15 de julio de 2016) El Salvador: "Esperanza para las víctimas" - Expertos de la ONU celebran la anulación de la Ley de Amnistía <https://www.ohchr.org/en/press-releases////el-salvador-hope-victims-un-expercome-welcome-annulment-amny-law>
 18. *Op. cit.* Cerqueira, pág. 6
 19. <https://cispes.org/section/law-reconciliation-timeline?language=en>
 20. John, Tara, 15 de diciembre de 2022 "El Salvador ha arrestado al 2% de su población adulta en su guerra contra las pandillas. Otros países están tomando nota." CNN <https://www.cnn.com/2022/12/15/americas/el-salvador-war-on-gangs-bukele-intl-latam/index.html>
 21. Sherman, Christopher (2021, 8 de diciembre) "U.S. Treasury: Gobierno de El Salvador negoció con pandillas." AP <https://apnews.com/article/nayib-bukele-el-salvador-gangs-c378285a36d55c18f741c3f65892f801>
 22. Martínez, Carlos, Gabriela Cáceres y Óscar Martínez (2021) Agosto El Faro: Investigación criminal de las pandillas en El Salvador encontró evidencia de negociaciones con GangLeaders.
 23. Alamán, Marcos (1 de marzo de 2021) "El presidente salvadoreño parece ganar el control del Congreso." <https://apnews.com/article/world-news-el-salvador-nayib-bukele-central-america-sansalvador-4bce54a9a5294b991465e92a2740486f>

24. Agren, David 2020 Febrero 16 The Guardian "El ardid militar de Nayib Bukele despierta alarmantes recuerdos en El Salvador"

<https://www.theguardian.com/world/2020/feb/16/el-salvador-nayib-bukele-military-alarming-memories>

25. Human Rights Watch 2023 Informe Mundial: El Salvador Eventos de 2022 <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/el-salvador#:~:text=In%20March%2C%20the%20National%20Assembly,detention%2C%20and%20%20due%20%20process%20%20violations.>

26. Ibid.

27. Alemán, Marcos (2023) 27 de octubre "El Presidente de El Salvador Bukele se inscribe para la reelección de 2024 — inconstitucionalmente, dicen los críticos"

<https://abcnews.go.com/International/wireStory/el-salvadors-president-bukele-registers-2024-reelection-unconstitutionally-104434602>

28. Youkee, Mat (2021, septiembre) "Nayib Bukele se llama a sí mismo el 'dictador más genial del mundo' - ¿pero está bromeando?" The Guardian <https://www.theguardian.com/world/2021/sep/26/nayib-bukele-el-president-coolest-dictator>

29. Oficina de Washington para América Latina (WOLA) (27 de marzo de 2023) "Un año de libertades civiles suspendidas en El Salvador: Cuando la excepción se convierte en la regla" <https://www.wola.org/2023/03/year-suspended-civil-liberties-elsalvador-whe-becbech-exception-becomes/año>

30. Oppenheimer, Andrés (2023 actualizado el 29 de julio) "Bukele de El Salvador es el presidente más popular de América Latina. Pero ¿a qué costo?" Miami Herald 29 de septiembre de 2023. <https://www.miamiherald.com/news/local/news-columns-blogs/andres-oppenheimer/article277719883.html>

31. Departamento de Investigación Estadística (2023 agosto) " Países con el mayor número de reclusos por cada 100.000 habitantes del país, a enero de 2023" <https://www.statista.com/statistics/262962/countries-with-the-most-prisoners-per-100-000-inhabitants/>

32. Reuters (2023, 1 de febrero) "El Salvador abre una prisión de 40.000 personas mientras los arrestos se disparan en la represión de pandillas" <https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-opens-40000-person-prison-arrests-soar-gang-crackdown-2023-02-01/>

33. France 24 (23 de agosto de 2023) "Dentro de la mega-prisión de El Salvador que contiene a 12.000 presuntos gánsters." <https://www.france24.com/en/live-news/20230823-inside-el-salvador-s-mega-prison-holding-12-000-alleged-gangsters>

-
34. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=srOoT3FfyrY>
35. Freeman, Will (2023, 16 de febrero) "La creciente lista de admiradores latinoamericanos de Nayib Bukele." *Americas Quarterly* <https://www.americasquarterly.org/article/nayib-bukeles-growin-list-of-american-admirers/>
36. Uetricht, Micah y Branko Marcetic, (2016 12 de diciembre) "Recordando El Mozote", *Jacocin* <https://jacocin.com/2016/12/el-mozote-el-salvador-war-reagan-atlatlatl-masacre>
37. Nickelsberg, Robert (1983) "Batallón Atlacatl durante operación militar en San Miguel", *Archivo de Investigación Digital de la Universidad Americana* <https://dra.american.edu/islandora/object/auislandora%3A96599>
38. Reuters (2022) Noviembre "El Salvador libera a un oficial del ejército tras la masacre jesuita." <https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-court-frees-army-officer-behind-jesuit-massacre-2022-11-15/>
39. Vivanco, José Miguel (9 de noviembre de 2020) "El Ejército de El Salvador, con la ayuda del Presidente, bloquea la investigación de la masacre de El Mozote", <https://www.hrw.org/news/2020/11/09/el-salvadors-arm---help-blocks-el-moz-moz-cre-massa-investigación>
40. Gressier, Roman (2023, 29 de septiembre) "Juez de Virginia rechaza deportación del coronel salvadoreño vinculado a la masacre de El Mozote" *El Faro* https://elfaro.net/en/202309/el_salvador/27075/virginia-judge-deportación-de-salvadoreños.atado-al-mozote-masacre?utm_source=El+Faro_DB&utm_campaign=8e1df7485d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_0422_01_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0_0365af5b-8e7485d-395132080
41. Ibid. página 2
42. Luz Nóchez, Maria (25 de agosto de 2023) "Carta de la Academia regaña a Bukele por representar los Acuerdos de Paz como una farsa", *El Faro* <https://elfaro.net/en/n...>
43. Op. cit. Gatehouse, Mike (2023 febrero)
44. Focos TV (2019, December 5) "La Masacre Olvidada del Rio Lempa" <https://focostv.com/los-olvidados-por-la-historia/la-masacre-ignorada-del-rio-lempa.html>
45. Valencia Caravantes, Daniel (2015, April 25) "Investigación señala responsabilidad de coronel Ochoa Pérez en masacre en Cabañas"
46. Lainez. V., (2020 June 20), "Masacre en el caserío Los Planes - El Picacho", <https://www.abriendobrecha.org/santa-marta/248-masacre-en-el-caserio-los-planes-el-picacho>

-
47. Diaz, Marvin (1917, November 1) "San Gregorio, historia de una masacre olvidada en Cabañas", <https://gatoencerrado.news/2017/11/01/san-gregorio-historia-de-una-masacre-olvidada-en-cabanas/>
48. PDDH El Salvador (2021, March 18) "Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, en ocasión de conmemorarse las masacres ocurridas, en marzo de 1981, en los cantones Santa Marta, Peña Blanca y San Antonio, municipio de Victoria, Cabañas", https://www.pddh.gob.sv/wp-content/uploads/2022/04/21_03_18-Pronunciamento-Conmemoraci%C3%B3n-masacre-de-campesinos-municipio-de-Victoria-Caba%C3%B1as-1981.pdf
49. Broad, Robin y John Cavanagh (2017) "Victorias históricas para la democracia y los derechos en América Latina". <https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/online-exclusives/historic-wins-for-democracy-and-rights-in-el-salvador>
50. Broad, Robin y John Cavanagh (2015) "Los países más pobres y el medio ambiente: ¿amigos o enemigos?" *World Development*, Volume 72, pp. 419-431
51. Broad, Robin y John Cavanagh (2021) *The Water Defenders: Cómo la gente común salvó a un país de la codicia corporativa*. Beacon Press
52. Montoya, Ainhoa (2023) "Juridificación post-extractiva: Deshaciendo los fundamentos jurídicos de la minería en El Salvador" *Geoforum* Volumen 138, enero <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718522002512#b0225>
53. Edenhofer N (2022). Auge minero y política contenciosa en Centroamérica: élites, movimientos y sistemas de partidos. *Revista de Estudios Latinoamericanos* 54, 253-281
54. Artiga-Purcell, James Alejandro (2022) "Hydrosocial extractive territories: Gold, sugarcane, and contested water politics in El Salvador," *Geoforum*, Vol 131 pp 93-104 <https://www.science.com/science/article/abs/pii/S0016722000598?via%3Dihub>
55. Broad, Robin y John Cavanagh (2015) "¿Países pobres y medio ambiente: amigos o enemigos?" *Volumen de Desarrollo Mundial* 72 pp. 419-431 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15000662>
56. Ibid.
57. El sitio web de ADES: <https://www.adessamarta.sv/en-us/about-us/brief-history-of-ades#:~:text=ADES%20was%20born%20out%20of,the%20conflict%20conflict%20of%201980.>
58. Ibid.

-
59. Artiga-Purcell, J. Alejandro (2018) " De la minería al agua: 25 años de solidaridad y organización comunitaria." Sitio web de la Fundación: <http://www.share-elsalvador.org/blog/de-mining-to-water-25-años-dela-comunidad-solidaridad-y-organización>
60. Ibid.
61. Véase: https://ips-dc.org/open_letter_to_world_bank_officials_on_pacific_rim-el-salvador_case/Seetambién <https://stopesmining.org/>
62. Cavanagh, John (2023) "¿Hay dinero minero detrás del arresto de los defensores salvadoreños del agua?" Foreign Policy in Focus, 1 de febrero <https://fpif.org/is-mining-money-behind-the-arrest-of-salvadoran-water-defenders/>
63. Op. cit Broad y Cananagh (2015)
64. Brauch, Martin D. (2017) 13 de marzo Noticias del Tratado de Inversión "Pac Rim v. El Salvador: todas las reclamaciones desestimadas; OceanaGold pagará US\$8 millones en costos"
<https://www.iisd.org/itn/en/2017/03/13/all-claims-dismissed-oceanagold-to-pay-usd-8-million-in-costs-pac-rim-cayman-llc-v-el-salvador-icsid-case-no-arb-09-12/>
65. Collins, Denis (2009) September Journal of Business Ethics, page 259 " El fracaso de un MNC de minería de oro socialmente sensible en El Salvador: ramificaciones de la desconfianza de las ONG" https://www.researchgate.net/publication/225267300_The_Failure_of_a_Socially_Responsive_Gold_Mining_MNC_in_El_Salvador_Ramifications_of_NGO_Mistrust
66. Ibíd. "a) El ciudadano"
67. Pérez-Rocha Manuel (2014) "When Corporations Sue Governments", New York Times, Dic.3 <https://www.nytimes.com/2014/12/04/opinion/when-corporations-sue-governments.html>
68. Montoya, Ainhoa (2023) "Juridificación post-extractiva: Deshaciendo los fundamentos jurídicos de la minería en El Salvador", Geoforum Volumen 138, Enero.
69. Broad, Robin y John Cavanagh (2021) The Water Defenders: Cómo la gente común salvó a un país de la codicia corporativa", Beacon Press, segunda edición. <https://www.amazon.ca/Water-Defenders-Ordinary-Country-Corporate/dp/0807029025>

-
70. Lakani, Nina (2017) "El Salvador hace historia como primera nación en imponer una prohibición total a la minería de metales." The Guardian <https://www.theguardian.com/global-desarrollo/2017/mar/30/el-salvador-makes-history-firon-nation-impose-blanket-ban-metal-mineria>
71. Op. cit. Montoya (2023)
72. Schalk, Owen y Pedro Cabezas (2023, 21 de enero) "El Salvador detiene a activistas anti-mineros como empresas transnacionales de inversión visual", Canadian Dimension <https://canadiandimension.com/articles/view/el-salvador-arrests-anti-mining-activists-as-transnational-compas-inversion>
73. Alas, Sarai (2022 ocother 22) "Ambientalistas manifestaron su preocupación por posibles reformas sin debate público", <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-salvadoreno-asigna-4.5-millones-para-revisar-ley-minera-20221028-0075.html>
74. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de El Salvador (2023 November), "Análisis Del Proyecto De Presupuesto 2024" <https://drive.google.com/file/d/1PfpPOdj7HBAdUpaQ9poSms7qmGeoyzh-/view>
75. Op.cit Radwin, Maxwell (2023 2 de agosto) <https://news.mongabay.com/2023/08/international-community-calls-for-rele-of-salvador-antimining-activistas/>
76. Broad, Robin y John Cavanagh (2016, 1 de octubre) "Los ejecutivos de una corporación minera global asumieron que sería fácil abrirse camino en el norte rural de El Salvador. Estaban equivocados." <https://inequality.org/research/el-salvador-lessons-tpf-fight/>
77. Lakhani, Nina (2023 10 de abril) "Environmental defenders reel from México and Central America attacks", <https://www.theguardian.com/world/2023/apr/10/environmental-defenss-mexico-central-america-attacks>
78. Cavanagh, John y Olivia Alperstein (20 de enero de 2023) "251 organizaciones de 29 países piden al gobierno salvadoreño que retire los cargos contra líderes de Water Defenders arrestados el 11 de enero", Instituto de Estudios Políticos. <https://ips-dc.org/release-251-organizations-from-29-countries-call-on-salvadoran-government-to-drop-the-charges-against-leading-water-defenders-arrested-on-january-11/>
79. Divergentes (2023 October 12) "Todo lo que debe saber sobre la deuda pública de El Salvador que asfixia a Nayib Bukele"
80. Aleman, Uveli (2023 Septmber 5) "La Cepal prevé que la economía de El Salvador crezca un 2.1 % en 2023", <https://diario.elmundo.sv/economia/la-cepal-preve-que-la-economia-de-el-salvador-crezca-un-21-en-2023>

-
81. Divergentes (2023 September 12) “¿Más inversión en El Salvador?” <https://www.divergentes.com/mas-inversion-en-el-salvador/>
82. Magaña, Yolanda (2023, October 17) “Polémica en Asamblea por recorte de \$108 millones que incluye a Educación y Seguridad” <https://diario.elmundo.sv/politica/polemica-en-asamblea-por-recorte-de-108-millones-que-incluye-a-educacion-y-seguridad>
83. Op. cit. Cavanagh y Alperstein (21 de enero de 2023) <https://ips-dc.org/rele-251-organizaciones-de-29-paises-call-on-salvadoran-government-to-the-charges-aga-lead-water-defenders-arrestado-enero-11/>
84. Mining Watch Canada (2023 25 de abril) Decisión “Arrestos arbitrarios de defensores del agua en El Salvador pone en riesgo el Acuerdo de Paz.” <https://www.newswire.ca/news-releases/arbitrary-arrests-of-water-defenders-in-el-salvador-puts-at-risk-peace-agreement-854607069.html>
85. Sandoval, William (2023, May 15) “Relatora Especial de la ONU pide liberar a capturados de Santa Marta”, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relatora-Especial-de-la-ONU-pide-liberar-a-capturados-de-Santa-Marta-20230516-0059.html>
86. Véase, por ejemplo: (2023, 10 de julio) Santiago Pérez “El país con la tasa de homicidios más alta ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta” <https://www.wsj.com/the-country-with-the-high-murder-rate-no-has-the-high-incarceration-rate-11625401da7>
87. Herrera, L. (2023, November 10) “Cinco tesis sobre el régimen de excepción”, <https://gatoencerrado.news/2023/10/11/cinco-tesis-sobre-el-regimen-de-excepcion>
88. Patterson, Brent (2009) Consejo de Canadienses “Activistas Anti-mineros Asesinados en El Salvador”, <https://canadians.org/analysis/anti-mining-activists-el-salvador/>
89. Maldonado, Carlos (2023) El Paiz, “Nayib Bukele impone un nuevo cerco a las pandillas al movilizar a 7.000 militares en El Salvador” https://elpais.com/internacional/2023-08-01/nayib-bukele-impone-un-nuevo-cerco-a-las-pandillas-al-movilizar-a-7000-militares-en-el-salvador.html?rel=buscador_noticias
90. El Salvador Now. Org “Militares y policías se apoderan de la casa comunitaria de Cinquera” <https://www.elsalvadornow.org/2023/08/04/military-and-police-have-taken-over-the-community-house-of-cinquera-militares-y-policias-se-han-tomado-la-casa-comunal-de-cinquera/>
91. Ibid. El Salvador Ahora

-
92. Deutsche Welle, (2023, May 19), “El Salvador: piden investigar la captura de Manuel Gámez”, <https://www.dw.com/es/el-salvador-piden-investigar-la-captura-de-manuel-g%C3%A1mez/a-65672908>
93. Villaroel, Gabriela (2023) “Al menos 16 sindicalistas detenidos durante régimen de excepción”, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Al-menos-16-sindicalistas-detenidos-durante-regimen-de-excepcion-20230418-0059.html>
94. Reuters (2023) 14 de junio “El Salvador consolida gobiernos locales, la oposición advierte de toma de poder”
<https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-consolidates-local-governments-opposition-warns-power-grab-2023-06-14/>
95. Cispes (2023) Blogpost 25 de septiembre, “El régimen de Bukele intensifica los ataques contra los sindicatos”
<https://cispes.org/article/bukele-regime-ramps-attacks-unions>
96. Fondo Monetario Internacional (2023) Enfoque por países del FMI <https://www.imf.org/en/News/Articulos/2022/02/15/cf-el-salvadors-comes-comes-comes-un-aumento-de-los-riesgos>
97. 77 Papadovassilakis, Alex (2021) 10 de mayo Insight Crime “Pandemic Spending Immunity Deepens El Salvador Corruption Concerns” <https://ightcrime.org/news/pandemic-immunity-el-salvador-corruption/>
98. 88 *Ibíd.*
100. Osgood, Brian (2023) April “‘Criminalising journalism’: Famous Salvadoran outlet to relocation,” Aljazeera <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/14/criminalising-journalism-famous-salvadoran-paper-to-relocation>
101. El Grupo Centroamericano (2023) 10 de mayo <https://www.thecentralamericangroup.com/el-salvador-and-china-trade/>
102. Jennings, Ralph (2022) 10 de noviembre South China Morning Post <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3199152/chinas-free-trade-talks-el-salvador-reflect-beijings-inroads-us-backyard>
103. BBC (2021) 3 de mayo “Estados Unidos preocupado por la remoción de los mejores jueces salvadoreños.” <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56970026>
104. *Ibid.*

105. Mejia, Juan Carlos (2021) September 4, [elsalvador.com](https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/jean-manes-gobierno-estados-unidos-condena-decision-sala/875761/2021/) “Jean Manes: El gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada por la Sala de lo Constitucional sobre reelección de Bukele <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/jean-manes-gobierno-estados-unidos-condena-decision-sala/875761/2021/>”

106. Reuters (2022) 14 de julio “Ministro de Finanzas de El Salvador dice que un posible acuerdo del FMI no es una panacea”

107. Martínez, Carlos, Gabriela Cáceres y Óscar Martínez (2021) Agosto El Faro: Investigación criminal de pandillas en El Salvador encontró evidencia de negociaciones con pandillas en el gobierno de Bukele

108. Alan, Trent (2023) 1 de noviembre Cryptonews “Una investigación revela que El Salvador utilizó indebidamente un tercio de los 600 millones de dólares de alivio COVID para Bitcoin”, <https://cryptonews.com/news/investigation-als-el-salvador-misused-third-of-600-covid-relief-for-oin.htm>

109. Gobierno de Canadá (2019): “Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos” https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/issues_development-enjeux_developpement/human_rights-droits_homme/rights_defenders-guide-defenseurs_droits_sp.pdf